

# BRASIL: DOS DECADAS DE GOBIERNOS MILITARES

HERNÁN RODRÍGUEZ FISSE  
Universidad de Chile

## INTRODUCCIÓN

El derrocamiento del Presidente Joao Goulart, el primero de abril de 1964, no fue el resultado de un golpe militar al estilo clásico. Lo típico para muchos países latinoamericanos era ver caudillos que se apoderaban de sus respectivas naciones. Lo novedoso e interesante para el analista político es que con la llegada de las Fuerzas Armadas al poder en Brasil se produce lo que algunos han denominado el "golpe institucional". Esto quiere decir que los militares toman el poder como institución y no en la forma tradicional de caudillismo.

La llegada al poder tampoco se produce en cualquier momento, como en las situaciones anteriores, sino que los militares acceden al gobierno del país a petición de la ciudadanía, y más específicamente, de un determinado sector que solicita expresamente la presencia de las Fuerzas Armadas para que tome el control del poder político. Les piden claramente que salgan de sus cuarteles.

En esta nueva forma de acceder al poder político es necesario que se den dos situaciones:

1° La existencia de un ambiente o clima de caos e inseguridad previo en el país que haga necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas. Que de alguna manera los militares perciban que la seguridad nacional corre peligro. El clima de caos puede ser real, producto de una campaña destinada a ese propósito, o ambas.

2° El intento de los militares de poner en marcha un modelo de sociedad previamente elaborado. Una utopía propia de lo que

debería llegar a ser el país; un conjunto de objetivos nacionales o metas a alcanzar.

En el caso de Brasil, y es lo que pretendemos demostrar en esta exposición, se dan estas dos situaciones. Además, las Fuerzas Armadas han actuado con un alto grado de cohesión, lo que les ha permitido mantenerse en el poder durante dos décadas (1964-1984). La renovación de los presidentes militares, cada cinco años, no ha dejado de reflejar lo que el alto mando considera como objetivos nacionales en su conjunto. Los presidentes Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel y Figueiredo han sido fieles seguidores del mandato de las Fuerzas Armadas y solamente los diferencia su estilo político y los aspectos puntuales del programa que les corresponde desarrollar.

#### ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La caída de Goulart se empezó a gestar desde el momento mismo que asumió la presidencia del país el 7 de septiembre de 1961, luego de la crisis provocada por la renuncia de Janio Quadros. Como vicepresidente electo le correspondió constitucionalmente asumir el mando de la nación. Su fama de populista o varguista (seguidor de Getulio Vargas) no era algo muy bien visto por la oligarquía, que desde un comienzo le obstaculizó su labor de gobernante.

A lo señalado se añaden otros antecedentes que dificultan seriamente la gestión de Goulart durante los tres años que alcanzó a gobernar. Un enorme déficit (para aquella época) de unos 380 millones de dólares en el presupuesto de 1961, un parlamento que limitaba sus atribuciones y las relaciones con los Estados Unidos pasando por momentos difíciles. A esto último había contribuido su cuñado, el entonces Gobernador de Río Grande del Sur, Leonel Briozola, que en febrero de 1962 expropió el sistema telefónico, perteneciente a la International Telephone and Telegraph, ofreciendo por el pago de la expropiación la suma de 400.000 dólares, mientras

la ITT exigía una suma veinte veces superior. Anteriormente ya había expropiado las instalaciones de energía eléctrica de la American and Foreign Power, pagando la suma de un cruzeiro, para cumplir formalmente con un recaudo legal. Brizola había descubierto una cuantiosa estafa de esta empresa contra el tesoro público y en los fundamentos de la expropiación dijo que la indemnización ya había sido pagada con creces por el Estado, debido al enorme fraude descubierto.

Paralelamente a lo anterior, Goulart logró aprobar una ley para limitar al 10 por ciento del capital invertido en el país las remesas de ganancias al exterior y no poder reinvertir las ganancias restantes como capital nuevo, por parte de las compañías extranjeras en Brasil.

Los resultados directos de todas estas medidas fueron que los Estados Unidos redujeron su ayuda de 335 millones de dólares en 1962 a 174 millones de dólares en 1963.

Para solucionar el conflicto con el Parlamento, Goulart dio uno de los pasos políticos más importantes de su gobierno al realizar un plebiscito nacional. En él solicita la devolución de sus poderes y que se le permita regresar a un régimen presidencialista. El plebiscito se llevó a cabo en enero de 1963 y logró una mayoría favorable del 80%.

El éxito alcanzado en el plebiscito a la larga se vuelve en contra del propio Goulart, ya que la campaña política que precedió al acto mismo fue de una fuerte lucha entre sectores antagónicos, que radicalizó las respectivas posiciones. A ello se sumaban medidas económicas que herían fuertes intereses, como la expropiación de haciendas de más de 500 hectáreas colindantes con caminos o vías férreas y otras que no lograban solucionar los problemas de los trabajadores y de la clase media. El gobierno no contaba con los medios para apoyar una política populista que fuera capaz de solucionar los graves problemas sociales. La tasa de inflación llegó en 1963 al 81%, mientras el exiguo aumento del 2,1% del P.B.N. era índice elocuente del estancamiento económico que mantenía en receso el flujo inversionista, tanto interno como externo, público y pri-

vado. Entre tanto, la escasez de los productos de consumo más esenciales, objeto principal de la especulación que los encarecía, se se hacía sentir cada vez más, presionando sobre los sectores medios que, en gran medida, habían sido postergados por los obreros urbanos en las mejoras salariales. Sucesivas huelgas paralizaban los transportes y los servicios públicos.

Las manifestaciones de descontento fueron, por otra parte, hábilmente capitalizadas por la élite empresarial. A través de campañas en los medios de comunicación y de organismos como el Instituto de Pesquisas y Estudios Sociales y el Instituto Brasileño de Acción Democrática, se creó una situación cada vez más adversa al gobierno de Goulart.

Sin otra salida y presionado por el movimiento de masas, Joao Goulart se volvió hacia la izquierda. Su mensaje anual al Congreso en los primeros meses de 1964 se convirtió en un ultimátum dirigido al Parlamento para que aprobara un conjunto de reformas. Su nuevo programa estaba orientado en función del cambio social. Planteara la redistribución de tierras e ingresos, la nacionalización de las grandes empresas y la movilización política de las masas urbanas y rurales.

Durante el gobierno de Goulart se establecen relaciones con la Unión Soviética y se legaliza el Partido Comunista. Con ello la oposición gana una importante bandera en su campaña: "Luchar contra el comunismo". El peligro de que el país caiga en manos del comunismo es la plataforma de lucha de amplios sectores de la clase media que son movilizados a través de organizaciones como la Liga Independiente por la Libertad, Movimiento Familiar Cristiano, Unión Cívica Femenina, Liga de Mujeres Democráticas. Son las mujeres de estas agrupaciones las que hacen sonar las cacerolas en las noches para manifestar su repudio al gobierno y su política económica.

La Iglesia tampoco estaba ajena a los acontecimientos que se producían y juega un activo papel en la lucha contra el gobierno de Goulart. Diez días antes que se produzca el derrocamiento del Presidente, da su más pleno respaldo a la famosa "Marcha de la

Familia, con Dios, por la Libertad”, que reunió a más de quinientas mil personas, según el *Jornal do Brasil*.

Con lo señalado se puede afirmar que el ambiente necesario para producir la intervención de las Fuerzas Armadas ya existía. Lo único que faltaba era el detonador final y éste se produce cuando 1.425 marinos e infantes de marina se amotan en contra de sus oficiales (la llamada “Revolución de Bolsillo”), y cuando éstos tratan de castigar a los culpables, Goulart intercede por ellos. Con ello el Presidente dio un paso excesivamente audaz, comprometiendo la disciplina militar.

Las primeras tropas rebeldes al mando del general Olimpo Mouraou Filho, procedentes de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, rápidamente obtuvieron el apoyo de la totalidad de las Fuerzas Armadas, alarmadas por la quiebra de la disciplina y la jerarquía militar. A esta primera rebelión se suman otras.

Un día antes de tomar el control del poder, los generales le entregan una carta a Goulart que dice lo siguiente: “El país se encuentra en un clima de gran aprensión e intranquilidad, debilitado por la acción desarrollada por algunos políticos que, con grave desprestigio para los partidos democráticos existentes, procuran sustituirlos por grupos comunistas que a espaldas de la ley buscan presionar a los poderes de la República, a través de huelgas o amenazas de huelgas”. Más adelante agregan: “El fantasma de una dictadura comunista-sindical se cierne sobre la nación, contribuyendo a aumentar la grave inflación que tanto sufrimiento representa para el pueblo brasileño”.

El 2 de abril, Goulart señala que quiere impedir el derramamiento de sangre y se va a su estancia de Río Grande del Sur, de donde pasa a Uruguay. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se hacen cargo de la situación. El Congreso declara vacante la Presidencia e instala al Presidente de la Cámara de Diputados, Pascual Rainieri Mazzilli, como Presidente provisional. En Río de Janeiro en la “marcha de las familias”, un millón de manifestantes dan su apoyo a las Fuerzas Armadas.

Sin haber disparado un solo tiro, las Fuerzas Armadas, que habían quedado como únicas dueñas del poder, relegaron a los sectores políticos a un papel secundario y llevaron a la presidencia, con la aprobación del Congreso, al mariscal Humberto Castelo Branco, Jefe del Estado Mayor del Ejército, que asumió el mando el 15 de abril, con el propósito de completar el período de Goulart, es decir, hasta el 21 de enero de 1966.

#### GOBIERNO DEL MARISCAL HUMBERTO CASTELO BRANCO

El término anticipado del gobierno de Goulart fue saludado con euforia por la prensa local. El día 2 de abril de 1964 los principales diarios de Brasil colocaron los siguientes titulares: "Rusia fue vencida", "Brasil salvó al mundo", "Fidel Castro no durará 6 meses".

El Presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, envía un telegrama de congratulaciones por el "desenlace constitucional de la crisis", al presidente provisional Rainieri Mazzilli. Este hecho era indicativo de lo que sería el nuevo estilo que le iba a dar a las relaciones con los Estados Unidos el nuevo gobierno.

Al asumir la presidencia del país el mariscal Castelo Branco, el nuevo régimen tuvo como objetivo preservar la estabilidad social, a través de las herramientas propias del Estado. El economista Roberto Campos, ex embajador en Washington, fue nombrado Ministro de Planeamiento y tuvo la responsabilidad de elaborar un Plan Trienal que tenía dos objetivos: contener la inflación —reduciendo el nivel general de los precios del 92,4% alcanzado en 1964 al 25% en 1965 y al 10% en 1966— y reactivar el ritmo descendente del incremento del Producto Bruto, fijándolo en 6% para el período 1965-1966. Al capital extranjero el plan le asignaba un papel fundamental. De una tasa de formación de capitales del 17% anual, el plan asignaba el 28,1% al capital extranjero para 1965 y el 29,4 en 1966.

La falta de crédito interno obligó a las industrias a disminuir sus costos de producción reduciendo la mano de obra, que fue reem-

plazada por una mayor tecnificación. La asociación con los grupos extranjeros, para los que no existían las limitaciones crediticias, fue la forma más fácil de solucionar el problema. Mientras se beneficiaba ampliamente a las grandes empresas nacionales y extranjeras, en particular a aquellas dedicadas a la industria pesada, simultáneamente, y en gran parte debido a la contracción provocada en la demanda, se dificultó la subsistencia de la pequeña y mediana industria vinculada a la producción de bienes no durables.

El objetivo del régimen fue consolidar una industria de bienes intermedios, de consumo durable y de equipos, altamente tecnificada y con fuerte capacidad competitiva, capaz de convertir al país en una potencia industrial. Esta industria sería la condición ineludible para realizar una presunta expansión exterior. Así llegaron a integrarse los intereses de la gran industria y los sueños hegemónicos de la élite militar brasileña, simbiosis que incluso se expresó a través de los vínculos establecidos a nivel de la producción bélica como nuevo sector de la economía brasileña. La decisión de instalar una industria modernizada llevaba como contrapartida el problema del desempleo —sumamente grave en un país de fuerte crecimiento demográfico, que lanza anualmente al mercado un millón de personas en edad activa—, impidiendo la ampliación del mercado interno. Precisamente esta imposibilidad de contar con un mercado interno en expansión perjudicó aún más a los sectores industriales dedicados a la producción de bienes de consumo, presentándoles como única alternativa la exportación de su producción. El bajo costo de la misma, alcanzado gracias a la política de contención salarial en un país que cuenta con abundante reserva de mano de obra, acrecentada por la mayor tecnificación, facilitaría la colocación en el exterior de los productos industriales brasileños, siempre que esta pretendida expansión no chocara con los intereses industriales de los Estados Unidos, tal como sucedió en el caso de la industrialización y exportación del café soluble.

El gobierno de Castelo Branco promovió por todos los medios el acercamiento a los Estados Unidos. Las facilidades otorgadas a la inversión americana la convirtieron en la principal fuente finan-

ciera del país, así como en su mejor cliente, ya que en 1965 le compraron al Brasil productos por un valor de 490 millones de dólares. Por intermedio de la AID, en 1965 recibió más de 78 millones de dólares. Esta nueva dirección de las relaciones internacionales del Brasil, que abandonaba los principios de la política exterior independiente invocando razones geopolíticas, estuvo dirigida en un principio por el Ministro de Relaciones Exteriores de Castelo Branco —Vasco Leitão de Cunha—, quien sostenía que el concepto básico de la diplomacia brasileña debería ser el de la “interdependencia continental”. Este principio se basaba en una teoría elaborada por el general Golberi do Couto e Silva. Su doctrina, llamada de barganha (canje) leal, partía del supuesto de que debido a su propia posición geográfica Brasil no podía escapar a la influencia norteamericana. Por lo tanto, sólo le cabía aceptar conscientemente la misión de asociarse a la política de los Estados Unidos en el Atlántico Sur.

Cuando Castelo Branco se refirió a la crisis dominicana <sup>1</sup>, motivada por la invasión de los Estados Unidos a esa nación, proclamó la necesidad de reemplazar el concepto de fronteras físicas o geográficas por el de “fronteras ideológicas”, declarando que de acuerdo con la concepción brasileña acerca de la seguridad nacional, ésta no se limitaba a las fronteras físicas del Brasil sino que se extendía a las fronteras ideológicas del mundo occidental. Lo señalado obedecía en forma muy precisa a los planteamientos de la llamada doctrina de Seguridad Nacional desarrollada, para el caso de Brasil, por un grupo de oficiales en la Escuela Superior de Guerra. Esta escuela fue fundada en 1949, siguiendo el modelo de la National War College, de Washington. Pero sus orígenes estaban más atrás. Por un lado, la influencia militar francesa en la oficialidad brasileña, que a través de sus misiones e instructores, traen las ideas de la Acción Católica y, por otro lado, el integralismo de Charles Maurras y de Plinio Salgado, una especie de versión brasileña del fascismo italiano, muy en auge en la década de los treinta.

<sup>1</sup> Invasión de los marines norteamericanos en República Dominicana en 1965.



Donde mejor impacto tienen estas ideas es en un grupo de oficiales que ya en 1922 se había dado a conocer, al intentar un golpe militar, tomándose el fuerte de Copacabana. Este movimiento, llamado de los "tenientistas" (18 tenientes), son los hombres que más tarde van a formar la Escuela Superior de Guerra y que ocuparán importantes cargos en el gobierno de Castelo Branco: Cordeiro de Fariás en el Ministerio del Interior, Juárez Távora en Obras Públicas y Juracj Magalhaes en Justicia y luego en Relaciones Exteriores.

Otra influencia que sufre este grupo proviene de las corrientes positivistas que hablan de progreso, ciencia, industria. También reciben los planteamientos de los intelectuales Alberto Torres y Oliveira Viana, ambos críticos del sistema liberal representativo europeo y convencidos de que el pueblo brasileño no estaba maduro para la democracia.

Una vez que los tenientes llegan a coroneles tienen la oportunidad de participar en la Segunda Guerra Mundial, luchando en Italia junto a los americanos, en el V Ejército, bajo las órdenes del general Patton. Esta experiencia, sumada a una estadía en los Estados Unidos al finalizar la guerra, marca en ellos el problema de la guerra fría y el rol que debe jugar Brasil en el conflicto Este-Oeste. La creación de la Escuela Superior de Guerra responde a todas las inquietudes señaladas anteriormente. Jerárquicamente depende del Estado Mayor de las fuerzas armadas y posee gran autonomía con respecto a cada una de las instituciones militares. Su propósito es formar una élite dirigente, reclutando a sus alumnos entre civiles y militares. A partir de 1964 los egresados de allí ocupan importantes cargos públicos en el gobierno.

La doctrina de Seguridad Nacional, enseñada en la Escuela Superior de Guerra, se convierte en el instrumento necesario para gobernar el país. Para los militares brasileños la Seguridad Nacional es la expresión completa de la nación que está por encima de los partidos políticos y sus habituales rivalidades. La guerra pasa a ser la realidad y la estrategia, la ciencia humana que responde a las interrogantes. La guerra fría es una guerra permanente que se

libra en todos los planos y que debe convertirse en un compromiso ineludible para toda la sociedad.

El modelo de sociedad que quieren imponer los militares, siguiendo la doctrina de Seguridad Nacional, encuentra algunos obstáculos desde el interior de las Fuerzas Armadas. Las primeras manifestaciones de oposición parten de los partidarios de la llamada "línea dura" (la política ya no se divide por ideologías o proyectos sino que por el grado de dureza; así surgen los "duros" y los "blandos") que critican al gobierno por mantener en funcionamiento el Parlamento y recurrir al procedimiento electoral para el cambio de autoridades estaduais. Sus planteamientos eran que "el gobierno debería gobernar más y legislar menos", y que con su actitud el gobierno permitía la acción de los políticos opositores.

Las elecciones de octubre de 1965, convocadas para elegir gobernadores en once Estados, le permitieron comprobar al gobierno que ni él ni sus aliados políticos contaban con el apoyo popular. Los candidatos opositores pertenecientes al Partido Social Demócrata, que en algunos casos sumaron los votos del Partido Trabalhista Brasileño, triunfaron en seis Estados, entre ellos Minas Gerais y Guanabara. El Partido Social Progresista, también opositor, obtuvo la gobernación de Alagoas, mientras los candidatos oficialistas de la Unión Democrática Nacional sólo se impusieron en cuatro Estados.

Los resultados de las elecciones dieron la razón a los militares que reclamaban en contra del daño que la actividad política opositora le provocaba al régimen. El 26 de octubre de 1965 Castelo Branco promulga la segunda Acta Institucional que proscribía la actividad política. Basándose en el principio de que la "revolución posee poderes constituyentes", el presidente asume facultades para gobernar por decreto y se cancelan las elecciones presidenciales previstas para octubre de 1966. Al fijar su vigencia hasta el 15 de marzo de 1967, Castelo Branco amplió tácitamente la duración de su mandato.

La segunda Acta Institucional confiere al Presidente amplias atribuciones, introduciendo trascendentales cambios en sus treinta

y cuatro artículos. Se establece que el Presidente puede decretar el estado de sitio en cualquier momento y mantenerlo por ciento ochenta días. Previa información del Consejo de Seguridad Nacional puede privar de sus derechos políticos por diez años a cualquier ciudadano, el que no podrá votar ni ser candidato, quedando también inhabilitado para intervenir en elecciones gremiales o reuniones de carácter político; sus actividades podrán ser vigiladas por agentes federales y las autoridades quedan facultadas para impedir su permanencia en ciertos lugares del territorio nacional y, en determinados casos, llegar a fijarle un lugar de residencia dentro del mismo. Todos los casos que, a juicio del gobierno, afectasen la seguridad nacional, quedaban bajo la competencia de la justicia militar.

Se declararon disueltos todos los partidos políticos y se suspendió la inscripción de nuevas agrupaciones. También se dispone que el nuevo Presidente de la República debía ser elegido por el Parlamento y no por votación popular directa. El Ministro de Justicia, Juracj Magalhaes convocó a los directores y responsables de todos los órganos de prensa para dar a conocer un nuevo decreto-ley que establecía multas de hasta un millón de cruzeiros y un año de prisión para los editores periodísticos que publicaran declaraciones de los ciudadanos que eran privados de sus derechos políticos.

El régimen tenía como marco para su acción la Constitución Política de 1946, pero su propio estilo institucional se lo fue dando a través de las diferentes Actas Institucionales y Complementarias. Estas se publicaban en función de las necesidades concretas que se presentaban al gobierno y con el fin de superar los límites jurídicos establecidos por la Constitución.

Luego de disueltos los antiguos partidos políticos, el gobierno, a través del Acta Complementaria N° 4, decretó la constitución de solamente dos agrupaciones políticas: la Alianza Renovadora Nacionalista (ARENA), oficialista, y el Movimiento Democrático Brasileño (M.D.B.) aglutinó a la oposición. Este último partido se convirtió en el único canal de expresión de las fuerzas opositoras, una vez constituido el Congreso. Al lado de esta oposición casi ine-

ficaz, el gobierno debe enfrentar a otro sector que cada día adoptaba posiciones más progresistas: la Iglesia Católica. El conflicto más grave estalló en julio de 1966 cuando los jefes militares prohibieron la difusión de un manifiesto firmado por diecinueve obispos del nordeste —encabezados por Helder Câmara, arzobispo de Olinda y Recife— que condenaba las injusticias cometidas contra los trabajadores nordestinos y toleradas por el régimen. Más que la condena en sí misma, el ejército se sintió sumamente molesto por el llamado a la resistencia que hacían los obispos, exhortando a los obreros a unirse firmemente para mantener las fuerzas de sus reivindicaciones. Aunque existían muy pocas posibilidades de conciliación, el gobierno procuró evitar un conflicto abierto con la Iglesia.

#### GOBIERNO DEL MARISCAL ARTHUR DA COSTA E SILVA

Cuando se aproximaba la fecha para renovar gobernadores, parlamentarios y Presidente, las Fuerzas Armadas designaron el candidato para este último cargo. El partido oficialista ARENA se encargó de instrumentalizar la elección del candidato del ejército en las Convenciones estaduais y el 26 de mayo de 1966 la convención nacional del partido ratificó la candidatura del Ministro de Guerra, Mariscal Arthur da Costa e Silva. Los sectores de la llamada “línea dura”, que desde un principio se habían agrupado a su alrededor, veían la posibilidad que durante su gobierno se frenara el proceso de desnacionalización de las empresas. Otros opinaban que con Costa e Silva podía iniciarse una apertura hacia todos los grupos sociales e incluso que se realizaría la necesaria etapa de transición que permitiera la vuelta a la democracia representativa.

El 3 de octubre de 1966 Costa e Silva fue elegido Presidente del Brasil con los votos de 469 parlamentarios. Los miembros de la oposición se abstuvieron de votar, como una forma de demostrar su rechazo al método para designar al Presidente. Pedro Aleixo, un civil dirigente de ARENA, fue consagrado Vicepresidente. El 15 de marzo de 1967 asume la presidencia de la República y ese mis-

mo año se aprueba una nueva Constitución con el propósito de ampliar las atribuciones del poder Ejecutivo.

La economía entró en una fase de recuperación que le permitió al nuevo Presidente aliviar la extrema rigidez del programa económico inaugurado en 1964 por Roberto Campos. Se levantaron los severos controles que pesaban sobre los salarios, permitiendo ligeros aumentos. El Ministro de Hacienda, Delfim Neto, puso en práctica la periódica devaluación del cruzeiro, que de 2.10 por dólar en 1963, pasó a 3.80 cruzeiros nuevos por dólar en 1968. Para aumentar las ventas en el mercado interno, a pesar de la disminución del poder adquisitivo, se estableció el sistema de ventas a crédito para los artículos de primera necesidad.

En el equipo tecnocrático-militar de Costa e Silva se mezclaron las reivindicaciones de varios grupos y especialmente del sector empresarial. Simultáneamente, la mayor apertura política, que hizo posible el libre juego de las reivindicaciones permitió la formación de una oposición entre los sectores que habían apoyado plenamente al régimen (pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente). Por otra parte, los trabajadores comenzaron a reorganizarse en torno de sus propias reivindicaciones inmediatas: la derogación de la ley antihuelga, el aumento de los salarios, la estabilidad en el empleo. En esta tarea se destacaron los obreros metalúrgicos con prolongadas huelgas en Belo Horizonte primero y luego en Sao Paulo, que incluyó, en esta última, la toma de las fábricas, enfrentándose abiertamente los huelguistas con las fuerzas policiales.

Los estudiantes también se movilaron en torno a las demandas propias. Luego las manifestaciones derivaron en consignas antigubernamentales (estaba presente el estímulo de los sucesos de mayo del 68 en París).

La prensa de Río de Janeiro afirmaba que las calles se habían transformado en un escenario de guerrilla urbana. Los repetidos desórdenes habían paralizado el centro comercial de Río. La policía era incapaz de restablecer el orden, agredida por piedras y botellas que los oficinistas arrojaban desde los rascacielos de la avenida Río Branco.

Al multiplicarse los focos de la movilización estudiantil, el gobierno decretó el receso universitario, pero el elevado número de detenidos no estudiantiles era índice elocuente de que la lucha se había extendido a otros sectores de la población. Intelectuales y artistas, lo mismo que sacerdotes, se aprestaban a realizar una manifestación conjunta con los estudiantes. Costa e Silva y sus principales colaboradores se oponían a decretar el estado de sitio, a pesar de la presión de algunos militares que lo consideraban indispensable. Muy por el contrario, decidieron autorizar una manifestación de los sectores opositores en Río de Janeiro.

El Movimiento Democrático Brasileño sostenía que el gobierno ya no tenía condiciones para decidir y que el país se hallaba en absoluto estado de intranquilidad, esperando que alguien lo sacara de la crisis. El gobernador de Sao Paulo, Abreu Sodre, advertía que en el país existía un clima favorable al golpe y denunciaba a grupos de extrema derecha que, contando con el momentáneo apoyo de las Fuerzas Armadas, querían crear el terror para favorecer la implantación de una dictadura más proclive a sus deseos y de "mano dura". Aunque parecía no haber divisiones significativas dentro de las Fuerzas Armadas, se notaba la presión de los grupos dentro de las mismas, que creían que el gobierno no hacía todo lo que debía en esas circunstancias.

Las presiones se fueron haciendo cada vez más fuertes provocando abiertas divisiones entre los que propiciaban una restauración democrática y los que querían una militarización definitiva del Estado.

Creyendo evitar un pronunciamiento de los militares duros, el presidente Costa e Silva promulga, el 13 de diciembre de 1968, el Acta Institucional N° 5. Con ello se suspende la Constitución promulgada en 1967, se clausura el Congreso por tiempo indeterminado, se aplica censura de prensa y se reducen las atribuciones del Poder Judicial.

Como consecuencia se producen una serie de detenciones entre políticos y periodistas. Estas medidas afectan ahora a aquellos sectores que habían apoyado plenamente la intervención de las Fuer-

zas Armadas en 1964. Nadie dudaba en Brasil ni en el exterior que el triunfo de la "línea dura" significaba el comienzo de una dictadura a largo plazo, libre de fachadas parlamentarias democráticas. Costa e Silva afirmó que la revolución de 1964 era irreversible y que cada vez que fuera necesario se harían nuevas revoluciones dentro de la revolución.

Los activistas de izquierda, en vista del nuevo curso que había tomado el gobierno y la violenta represión que se había generado, concluyeron que con ello se daba fin a la forma de lucha "institucional" (manifestaciones, protestas, huelgas) y que la lucha armada era el único recurso que quedaba. Ya anteriormente la habían practicado sin éxito los grupos "foquistas" en Río Grande do Sul durante 1965 y dos años más tarde en la Sierra de Caparaó. La Acción de Liberación Nacional dirigida por Carlos Marighela, ex diputado comunista, extrayendo las lecciones de estos fracasos, dará a la lucha armada una perspectiva nueva, enmarcándola en la estrategia de la "guerra revolucionaria". Esta contemplaba desde el principio la acción conjunta de los objetivos políticos y militares, postulaba la articulación de la vanguardia guerrillera y del movimiento de masas y la relación táctica entre el proletariado urbano y rural. Para Marighela, la guerra revolucionaria implicaba tres formas complementarias de lucha: la guerrilla urbana, la guerrilla rural y la guerra psicológica. Su estrategia se basaba en las condiciones específicas del Brasil, cuyo desarrollo histórico-social lo había llevado a un estado de crisis política permanente. Sólo hacía falta transformar esa crisis en conflicto armado mediante múltiples acciones guerrilleras, llevadas a cabo tanto en las ciudades como en el ámbito rural, hasta que el régimen se viera forzado a transformar la crítica situación política del país en una situación de ocupación militar. Esto irritaría a las masas, que a partir de entonces resistirían a las fuerzas represivas. La alianza de las masas con las vanguardias guerrilleras conduciría a la destrucción del aparato militar del Estado y a la toma del poder. A mediados de 1969 la guerrilla urbana se implanta con fuerza en Sao Paulo y Río de Janeiro.

Una de las acciones de más éxito para la guerrilla fue el secuestro del Embajador de los Estados Unidos que fue canjeado por quince presos políticos. La aceptación por parte del gobierno de las exigencias de los guerrilleros motivó serias discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas. A ello se sumó una grave enfermedad del Presidente Costa e Silva, que lo alejó de su cargo. Un triunvirato militar, compuesto por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, asumió conjuntamente el gobierno de la nación, desplazando al vicepresidente civil. El triunvirato se vio acosado por los que le echaban en cara su debilidad frente a las peticiones de los guerrilleros. Por otra parte, la búsqueda de los sospechosos desató una violenta represión, llevando a las cárceles a centenares de detenidos.

Para elegir un reemplazante de Costa e Silva, los altos mandos deliberaban activamente, evidenciando las discrepancias acerca del criterio a seguir para designar un nuevo presidente. Sin embargo, nunca se abandonó el criterio de mantener bajo el control militar la conducción política del país, especialmente en esos momentos, en que consideraban que la seguridad nacional estaba amenazada.

Para evitar vetos a posteriori, el triunvirato se inclinó por un procedimiento original: organizó sondeos de opinión entre los oficiales de mayor graduación, que, a su vez, consultarían con los cuadros medios. Este sistema se prolongó por un largo período, abarcando amplias discusiones en el terreno político, económico y social. La solución de compromiso se logró al designar al general Emilio Garrastazú Medici, quien se apresuró a declarar que mantendría los lineamientos de la política económica de su antecesor. Antes de entregarle el mando al nuevo Presidente, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas reformaron la Constitución de 1967; incorporaron la pena de muerte, redujeron el número de integrantes de la Cámara de Diputados y, en general, se le dio más atribuciones al Poder Ejecutivo, en desmedro del Legislativo.



## GOBIERNO DEL GENERAL EMILIO GARRASTAZÚ MEDICI

El 25 de octubre de 1969, el Congreso, reunido después de diez meses de receso, ratificó la designación del ex Comandante del III Cuerpo del Ejército, general Emilio Garrastazú Medici, como Presidente del Brasil. El candidato fue presentado por el partido ARENA y el MDB se abstuvo en la votación. El 30 de octubre se hizo cargo de sus nuevas funciones y entró en vigencia la Constitución reformada.

Con más poder que sus antecesores, Garrastazú Medici acentuó la línea dura. Tanto la oposición legal como la clandestina sufren duros golpes. La prensa es sometida a una fuerte censura. El Presidente no utiliza la mayoría que tiene en el Congreso y gobierna a través de decretos-leyes.

Las elecciones parlamentarias de 1970 no despiertan mayor interés en la ciudadanía, obteniendo un alto porcentaje los votos en blanco y nulos. La opinión pública se encuentra seducida por los impactos del llamado "milagro económico". La permanencia de Delfim Neto como Ministro de Finanzas en el gabinete asegura la continuidad de la política neoliberal.

El desarrollo económico, planteado como objetivo nacional por el gobierno, deja en evidencia los fuertes desniveles socioeconómicos del país. Más del 70% de la población vive en condiciones infrahumanas. Los éxitos logrados son sólo en beneficio de una pequeña minoría.

El sistema económico vigente hace crisis junto con los problemas del petróleo en 1973. Al cuadruplicarse el precio del "oro negro", Brasil, que depende casi exclusivamente de este combustible para su transporte interno y que sólo produce un 25% de este consumo, vio seriamente afectada su balanza comercial. Las enormes deudas que le genera el petróleo tratan de ser compensadas con el aumento de las exportaciones. La búsqueda de nuevos mercados hace que Itamarati comience a abandonar la tesis de las fronteras ideológicas y la reemplace por un "pragmatismo responsable". Se producen acercamientos con Pekín y las relaciones con la República Popular China

se establecen antes que hagan lo mismo los Estados Unidos. Con respecto a los países de Africa, la política exterior da un giro y se reconocen de inmediato los regímenes independientes que se instauran en Angola, Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau.

El acercamiento hacia el gobierno alemán, en la búsqueda de un importante respaldo a su política de energía nuclear, se inserta también en el marco de un cambio en las relaciones exteriores, configurando un panorama diferente a lo que acontecía en materia de política interna.

#### GOBIERNO DEL GENERAL ERNESTO GEISEL

En un contexto de crisis económica, con consecuencias en el aspecto político, asume, el 15 de marzo de 1974, el nuevo Presidente designado por las Fuerzas Armadas: el general Ernesto Geisel. En esta oportunidad, la oposición, a través del Movimiento Democrático Brasileño, presenta como candidato a Ulyses Guimaraes, su principal líder político. Pero Geisel obtiene 400 de los 503 sufragios del Colegio Electoral.

La Escuela Superior de Guerra (conocida en términos eufemísticos como la Sorbonne brasileña) a partir de 1973 ya había planteado que el modelo político tenía problemas y que no se había logrado legitimar ni ideológica ni electoralmente el régimen militar, como eran sus propósitos en 1964.

Lo aconsejable en esas circunstancias era iniciar un proceso de apertura hacia la democracia "en forma, lenta, gradual y segura", según las palabras del propio Geisel. De esta forma se quiere anticipar a las presiones de la oposición, manteniendo la iniciativa política.

Comienza en consecuencia un proceso de apertura o descompresión política controlada. A él se resisten los sectores militares de la llamada "línea dura". Para contrarrestar la injerencia de estos sectores en su política de apertura, el Presidente Geisel se apoya en el Servicio Nacional de Información, que no solamente controla a la

oposición, sino que empieza a actuar sobre los propios grupos militares disidentes. Durante este período, el aparato de inteligencia bajo la dirección del general Joao Baptista Figueiredo, la Casa Civil de la Presidencia, bajo el mando del general Golberi de Couto e Silva, y la propia Presidencia en manos del general Geisel, actúan en perfecta coordinación para copar los centros de decisión política y apartar de la lucha por la sucesión del poder al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y a los Comandos Militares. Con ello se agudiza la lucha interna de los militares, culminando con la destitución del general Hugo de Abreu, uno de los que más se resisten al proceso de apertura.

La primera prueba de que los propósitos del general Geisel no solamente eran intenciones se produce con motivo de las elecciones legislativas de 1974. En ellas, aparte de realizarse en un clima de relativa libertad, se registra un notable avance de la oposición. Dicho avance se debe, en parte, a la pérdida de votos por parte del partido oficialista ARENA (Alianza Renovadora Nacional), pero sobre todo a la disminución de los votos blancos y nulos. En relación a los comicios de 1970, la Alianza Renovadora Nacional baja su participación en el total de votos emitidos del 48,4% al 40,9% y los votos blancos y nulos se reducen del 30,3% al 21,3%, subiendo el porcentaje del Movimiento Democrático Brasileño del 21,3% al 37,8%.

El avance logrado por el MDB estimula la participación política de los profesionales, sector de la clase media que se había mantenido al margen y que estaba sufriendo los efectos de la crisis económica. A través de la Asociación Brasileña de Prensa, la Orden de los Abogados de Brasil y la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, empiezan a surgir iniciativas en pro de la apertura democrática.

La Iglesia católica y otros sectores cristianos, a través de sus pastorales de la tierra en defensa de los derechos de los indígenas y obreros y de su movimiento de comunidades de base, van llevando a la opinión pública a tomar conciencia de la importancia de la redemocratización.

El proceso de apertura llega también a los obreros. Después de varios años de ostracismo político, su acción movilizadora se empieza a notar en los obreros metalúrgicos de Sao Paulo. Surgen discusiones en torno al papel que les corresponde a los obreros en el proceso político, pero su acción se desarrolla en forma independiente de cualquier estrategia política; simplemente ven la oportunidad de plantear sus demandas y reivindicaciones a los empresarios y al Estado. Pero la acción desarrollada por los obreros contribuye a valorar la importancia del regreso a un sistema democrático.

Los movimientos femeninos también se manifiestan en contra de una "apertura controlada" y plantean una democratización real. Estas exigencias, que van más allá de lo que el gobierno quiere otorgar, obligan al Presidente Geisel a utilizar en forma constante el Acta Institucional N° 5, a restringir a los medios de comunicación (Ley Falcao) e incluso a clausurar el Congreso en abril de 1977, tras el rechazo a una serie de reformas al Poder Judicial. También bajo el mandato de Geisel se reduce a la mayoría y no a los dos tercios el quórum para las reformas constitucionales, se amplía el mandato presidencial a seis años y se establece la elección indirecta de senadores y gobernadores.

Al terminar su período presidencial en 1979, se ve enfrentado a una secuela de huelgas, a un avance sostenido de la oposición en las elecciones de 1978, especialmente de sectores de izquierda dentro del MDB, y a una aguda tensión al interior de las Fuerzas Armadas como consecuencia de la designación de su sucesor. Los sectores duros deseaban que el general Silvio Frota, Ministro de Defensa, ocupara la Presidencia, llegando incluso a un intento de pronunciamiento. Pero en esta oportunidad por primera vez se da un fenómeno nuevo en la sucesión presidencial: el MDB presenta como candidato a un militar en servicio activo, el general Euler Bentes Monteiro. Este hecho reflejaba el grado de conflicto a que había llegado la designación de un miembro de las Fuerzas Armadas para reemplazar a otro en la Presidencia del país. Geisel, con gran habilidad política y en vista de la gravedad del conflicto que se estaba produciendo, designó su propio candidato, el general Joao Baptista

Figueiredo. En la votación del colegio electoral obtiene 355 votos, contra 226 del general Bentes. Al entregarle el mando a Figueiredo, el general Geisel señala que lo eligió porque consideraba que era la persona capaz de llevar adelante el proceso de institucionalización, de disminuir las leyes de excepción y de dar al país determinadas salvaguardas que le permitan caminar pacíficamente hacia la democracia.

#### GOBIERNO DEL GENERAL JOAO BAPTISTA FIGUEIREDO

El nuevo Presidente asume el gobierno con una ventaja sobre sus antecesores: permanecer en el poder durante seis años, entre el 15 de marzo de 1979 y la misma fecha de 1985.

Desde el inicio de su mandato le correspondió dar pruebas fehacientes de que el proceso de apertura política y normalización institucional sería una realidad y no solamente una promesa.

Ofrecer a la nación una democracia "pluralista, social, humanista, auténticamente brasileña", obligaba a tomar importantes decisiones políticas. La primera de ellas es la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley N° 6.683 del 28 de agosto de 1979, que en su artículo primero dice textualmente lo siguiente: "Concédese amnistía a todos cuantos en el período comprendido entre el 2 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conectados con éstos, crímenes electorales, a los que tuvieran sus derechos políticos suspendidos, a los servidores de la Administración Directa e Indirecta, de las Fundaciones vinculadas al Poder Público, a los servidores de los poderes Legislativo y Judicial, a los militares y a los dirigentes y representantes sindicales, castigados con fundamento en las Actas Institucionales y Complementarias".

La amnistía decretada fue bastante amplia y respondió a los deseos de quienes sostenían una campaña para su implantación. Centenares de exiliados políticos regresan a Brasil, integrándose a la sociedad sin problemas ni rechazos. Los partidos políticos sirven de

gran ayuda para acoger a los exiliados, a cuyas líneas deben someter y condicionar su acción.

Paralelamente cesa la aplicación del Acta Institucional N° 5 y se permite una creciente libertad de prensa, especialmente en cuanto a las declaraciones y entrevistas que dan los exiliados que retornan.

Ambas medidas mejoran sustancialmente la imagen del régimen y le quitan a la oposición una importante bandera de lucha.

Con el retorno de los exiliados el Gobierno pensaba también estimular la reorganización de los partidos políticos. El bipartidismo impuesto durante el gobierno de Castelo Branco le estaba resultando incómodo al régimen como consecuencia del avance electoral obtenido en las últimas votaciones por el partido de oposición, el MDB. Como el estímulo para formar nuevos partidos no tenía efecto, el Gobierno empezó a apremiar por la "autodisolución" de los partidos de modo que la reorganización pudiera iniciarse haciendo borrón y cuenta nueva. A finales de octubre fue decretada una legislación de reforma de los partidos.

A partir de ese momento quedan conformados cinco partidos de oposición y uno de gobierno, de acuerdo a la siguiente denominación: a) Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que en el fondo se trata del mismo MDB, pero al cual se le antepone la palabra partido y conserva las mismas características de gran heterogeneidad ideológica entre sus integrantes; b) el Partido Popular (PP), definido como de centro; c) el Partido de los Trabajadores (PT) vinculado a la izquierda; d) el Partido Demócrata Trabalhista (PDT), y e) el Partido Trabalhista Brasileño (PTB). Estos dos últimos partidos se disputan la continuación del varguismo. Los partidarios del Gobierno se identifican con el Partido Demócrata Social (PDS), cuya definición ideológica es de tipo neoliberal.

En cuanto al Partido Comunista, si bien legalmente no está aceptado, gran parte de sus miembros exiliados han regresado. El Comité Central ha celebrado numerosas reuniones, el periódico del partido circula libremente y muchos de sus líderes han sido entrevistados en la televisión. La posición del partido es muy coincidente con la línea del eurocomunismo.

El proceso de apertura se pone a prueba en 1980, cuando a raíz de un ataque al corazón que sufre el Presidente Figueiredo, el Vicepresidente civil Aureliano Chávez es investido como Presidente interino. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas permiten que un civil se haga cargo de la Presidencia de la nación. Cuando en 1969 sucedió una situación similar, los militares impidieron que el Vicepresidente civil, Pedro Aleixo sucediera a Costa e Silva.

Luego de una ausencia de dos meses, Figueiredo retoma su cargo y comienza a preocuparse de las elecciones de 1982. En ellas se deben elegir veinticinco senadores (sólo se renueva una tercera parte del Senado, el resto es designado por decreto presidencial), 479 diputados federales, 974 diputados estatales, veintidós gobernadores estatales (el de Brasilia es designado por el Poder Ejecutivo), más de cuatro mil alcaldes y cerca de 38 mil concejales. Para estas elecciones se restituye el sistema de votación directa para los gobernadores, modificado por votación indirecta a partir de 1964.

Meses antes de efectuarse las elecciones se aprobó un complicado modelo de cédula electoral que obligaba al elector a colocar el número o el nombre del candidato. Se estableció una sobreponderación de los votos en las circunscripciones rurales y se impidieron las alianzas electorales. La aprobación de las enmiendas electorales produjo serias discrepancias entre partidarios y opositores al Gobierno. Estos últimos temían que los votos nulos pasaran del 50%, por lo complejo del sistema, y que en consecuencia la elección quedara nula.

La votación se efectuó el 15 de noviembre y el PDS obtuvo 12 gobernadores estatales, mantuvo la posición de primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados, aunque en esta última perdió la mayoría absoluta; logró más diputados estatales que los partidos opositores reunidos y consiguió tres cuartas partes de los cargos municipales.

El PMDB, demuestra que es la principal fuerza opositora al obtener nueve de las diez gobernaciones restantes. En el importante Estado de Sao Paulo, desde el punto de vista económico y del número de habitantes triunfa su principal líder, el demócratacristiano

Franco Montoro (Ministro del Trabajo en el gobierno de Goulart). En Minas Gerais obtiene la gobernación Tancredo Neves.

El PDT obtiene la otra gobernación en el Estado de Río de Janeiro con su candidato socialista Leonel Brizola, quien fuera gobernador del Estado de Río Grande do Sul, mientras su cuñado Goulart era Presidente y que vivió en el exilio hasta la amnistía de 1979.

Los resultados de las elecciones tienen enorme importancia en el proceso institucional brasileño y permiten afirmar que con ello se inicia una nueva etapa política. Se puede señalar que aunque la ley establezca la mayoría absoluta para la aprobación en el Congreso de reformas constitucionales, la propuesta de enmienda debe contar con un tercio de los votos en ambas cámaras, cifra que no alcanzan los partidos de oposición; lo mismo se aplica a los vetos del Ejecutivo, que requieren dos tercios de los votos de las Cámaras para ser rechazados.

Lo señalado anteriormente indica que el Gobierno continúa en una situación favorable. Pero lo más importante es que también va a poder elegir al sucesor del Presidente Figueiredo, ya que cuenta con el control del Colegio Electoral, compuesto por los miembros del Congreso Nacional y delegados de las asambleas legislativas estatales, que deberá designar en enero de 1985 al nuevo Presidente.

Por otra parte, el hecho de no contar el Gobierno con la mayoría en la Cámara de Diputados, da a la oposición la posibilidad, por primera vez, de influir en el proceso legislativo. La oposición logra un espacio de negociación que antes no tenía.

Lo mismo es posible esperar en los Estados controlados por gobernadores de la oposición, que en su conjunto representan el 80% del producto nacional y el 60% del territorio y la población del país, concentrando a la mayor parte de los obreros profesionales, oficinistas y clase media en general.

Interesante resulta la presencia de nuevos líderes en la contienda electoral y el interés demostrado por la juventud para concurrir masivamente a votar. También fue posible la reintegración de antiguos dirigentes políticos al nuevo marco institucional sin ninguna dificultad (existían ciertos temores al respecto); tal es el caso de



Brizola, de Miguel Arraes, elegido senador por Pernambuco; Iris Resende, gobernador de Goias; Darcy Ribeiro, vicegobernador de Río de Janeiro.

Con el espacio político ganado por la oposición comienzan las presiones para que las elecciones presidenciales de 1985 se hagan a través del voto directo. El gobierno se opone a ello y han surgido fórmulas alternativas. Una de ellas es que Figueiredo sea reelegido; esta idea tomó mucha fuerza como consecuencia del importante rol que jugó el Presidente al transformarse en el líder de la campaña electoral en favor de los candidatos del PDS (incluso viajó por todo el país con ese propósito). Luego de una nueva enfermedad que lo hizo dejar el cargo por un tiempo en manos del Vicepresidente, e incluso, viajar a los Estados Unidos para operarse, la idea de la reelección se ha desvanecido.

Junto con el debate acerca de cómo va a ser la sucesión presidencial y qué candidato van a elegir las Fuerzas Armadas (incluso se especula que pueda ser un civil o un anfibio: militar en retiro), se abren las posibilidades de un reagrupamiento de las fuerzas políticas, en vista del carácter tan heterogéneo de los partidos políticos. La poca claridad doctrinaria que poseen podría permitir muchos cambios en el futuro.

Pero la gran interrogante del Brasil de hoy es de carácter económico: cómo superar la gran crisis producida como consecuencia de un endeudamiento que llega a los 90 mil millones de dólares. Este es un hecho sin precedentes en la historia del Brasil. Sus efectos inmediatos han sido violentas manifestaciones de descontento en contra de la política económica aplicada por el gobierno de Figueiredo. Esta situación, incluso, ha sobrepasado a los propios partidos políticos, cuyos dirigentes no han sabido cómo controlar a sus partidarios. El espiral de violencia está poniendo en jaque a las propias Fuerzas Armadas, generando una aguda pugna entre los partidarios de retirarse a los cuarteles y entregar el poder a los civiles y los que propician un endurecimiento de las medidas y abandono del proceso gradual de apertura.

¿Cuál sector triunfará? Es la gran incógnita con la cual Brasil inicia 1984.

### CONCLUSIONES

Queda demostrado que el proceso político, a partir de 1964, ha pasado por diferentes etapas, pero que ninguna de ellas ha puesto en peligro real la permanencia de las Fuerzas Armadas en el poder. Durante estos veinte años han logrado controlar la situación política sin mayor contrapeso. El éxito de ello obedece, fundamentalmente, a que el régimen, junto con reprimir las manifestaciones populares, supo mantener algunos espacios para que una oposición de carácter legal pudiera desarrollarse políticamente. El Congreso mantuvo su actividad en términos formales, salvo los períodos de clausura señalados en el texto. Se continuaron efectuando elecciones, sin que el Gobierno perdiera poder político, salvo en la última realizada el 15 de noviembre de 1982.

También la madurez de la oposición ha contribuido eficazmente a la mantención del régimen y a un proceso gradual de apertura política. Evitaron disolverse, aun en los peores momentos de dureza del régimen, conteniendo con ello la radicalización de las posiciones. Nunca dejaron de considerar que la vía legal era la única que podía permitir un retorno a la democracia. Ello es un reflejo de la tradición brasileña de tolerancia y de respeto a las ideas, o tal vez, la poca aceptación de ideologías que planteen un enfrentamiento armado para resolver los problemas. La oposición siempre ha estado consciente que un retroceso en el proceso de apertura gradual podría ser trágico para la sociedad brasileña. Importantes y mayoritarios sectores de las Fuerzas Armadas coinciden con esa apreciación.

La existencia de líderes militares como Geisel y Figueiredo ha permitido, además, impulsar el proceso de redemocratización. Con su presencia han logrado relegar a un segundo plano a aquellos sectores de las Fuerzas Armadas que se oponen a todo tipo de convivencia con una oposición política.

Otra conclusión importante es que a pesar de los veinte años transcurridos, el régimen no ha podido desarrollar el modelo de sociedad ideal elaborado por los seguidores de la doctrina de Seguridad Nacional. La utopía terminó junto con el modelo económico que quisieron implantar. La herencia de la enorme deuda externa queda como símbolo visible del experimento. La agudización de las diferencias sociales y económicas ha terminado por desgastar a las Fuerzas Armadas y demostrar que su acción sólo es válida en momentos de crisis política aguda, pero no para erigir un modelo de sociedad ideal.

### BIBLIOGRAFIA

- MARINI, Ruy Mauro, *¿Abertura política o democratización?*, Le Monde Diplomatique, Francia, diciembre, 1983.
- STEPAN, Alfred (Edite by), *Authoritarian Brasil*, New Haven and London, Yale University Press, 1977.
- PARKER, Phyllis R., *Brasil and the quiet intervention 1964*, University of Texas Press, Austin, Texas, 1979.
- VARIOS AUTORES, *Brasil Hoy*, Siglo XXI, México, 1968.
- MENDES, Cândido, *Crize e Mudanza social*, Livraria Eldorado Tijuca Ltda., Río de Janeiro, 1974.
- DOS SANTOS, Theotonio, *Crisis institucional, democracia viable y alternativa democrática en Brasil*. Artículo en *América Latina: Proyectos de Recambio y Fuerzas Internacionales en los 80*, Edit. Edicol S.A., México, 1980.
- CARDOSO, F. y FALETTO, E., *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI, México, 1971.
- JAGUARIBE, Helio, *Desarrollo económico y desarrollo político*, Eudeba, Buenos Aires, 1964.
- FILPO MURILO, Melo, *El desafío brasileño*, Edit. Pomaire, Santiago, Chile, 1972.
- COMBLIN, Joseph, *El poder militar en América Latina*, Ediciones Sigueme, Salamanca, España, 1978.
- DE COUTO E SILVA, Golbery, *Geopolítica do Brasil*, Livraria José Olympo, Edit. Río de Janeiro, 1967.
- DE OLIVEIRA NETTO, Luis Camilo, *Historia, Cultura e Liberdade*, Livraria José Olympo, Edit. Río de Janeiro, 1975.
- VIANNA, Helio, *Historia do Brasil*, Edicoes Melhoramentos, Sao Paulo, 1963.

- PASSOS GUTMARAES, Alberto, *Infação e Monopolio no Brasil*, Edit. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1963.
- IANNI, Octavio, *Imperialismo y Cultura de la violencia en América Latina*, Siglo XXI, México, 1970.
- MARINI, Ruy Mauro, *Les limites de la libéralisation au Bresil*, Le Monde Diplomatique, Francia, julio, 1980.
- MOTTA, P. R., *Movimientos partidarios no Brasil: A Estrategia de Elite e dos Militares*, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1971.
- CASTELLO BRANCO, Carlos, *Os militares no poder*, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1977.
- DE MELO BRANCO, Alfonso Arinas, *Problemas políticos brasileiros*, Livraria José Olympo, Edit. Rio de Janeiro, 1975.
- HOROWITZ, Irwing Louis, *Revolución en el Brasil*, Fondo de Cultura Económico, México, 1966.
- MARINI, Ruy Mauro, *Subdesarrollo y revolución*, Siglo XXI, México, 1969.
- NUNN, Frederick, *Yesterday's Soldiers: European Military Professionalism in Southamerica 1890-1940*, Lincoln, USA, 1983.